

Estudios Sociales
Año XXVI, Número 93
Julio-Septiembre 1993

LA DEMOCRACIA, MATERIA PENDIENTE

Hemos pasado las segundas pruebas nacionales de cuarto y octavo curso. Y podemos decir que a nivel del país se nos ha quedado una materia pendiente: la democracia. Ante las elecciones nacionales que nos esperan en mayo del 94 es urgente darle un repaso y responder a los desafíos que nos presenta.

El primer desafío es la **credibilidad**. Si recorremos nuestra historia electoral caemos en la cuenta de la pérdida de credibilidad en las elecciones como un recurso democrático. Durante la Era de Trujillo las elecciones nunca fueron tales. En 1962 las elecciones desembocaron en un golpe de Estado. En 1966 quedó la impresión en muchos que fueron "preparadas" por la intervención norteamericana. En 1970 y 1974 el Partido Reformista fue a elecciones sin opositor real al retirarse el principal opositor, el PRD. En 1978 hubo un intento de impedir el ascenso del PRD que terminó con un arreglo de los resultados electorales a nivel de Congreso, el "Fallo Histórico". De nuevo en 1982 el conteo fue interrumpido. En 1990 quedó la impresión de un masivo fraude electoral con nueva interrupción del conteo de votos y múltiples irregularidades. Esta desconfianza se manifiesta en la abstención electoral, calculada en un 33% en 1970, 44.5% en 1974, 27.5% en 1978, 29.6% en 1982, 30.5% en 1986 y 40.6% en 1990. El gobierno actual estaba en el poder en los momentos de las elecciones más cuestionadas de nuestra historia reciente.

La situación provocada por los procedimientos en la preparación de las próximas elecciones más que generar un aumento de la credibilidad la ha disminuido: la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, las dificultades para asignar a ésta un presupuesto

suficiente, el contrato con la IBM-KODAK, la lentitud del procesamiento de los datos.

Los meses que nos quedan tienen que ser aprovechados para aumentar la confianza de la población en la limpieza del proceso electoral. Esto requiere una voluntad decidida del gobierno, de los partidos políticos y de la misma Junta. Requiere también una clara posición de neutralidad en las Fuerzas Armadas. Es necesario llegar a una situación que el pueblo sienta que su voto va a ser respetado. Para ello hace falta que los mecanismos electorales estén claramente definidos, que haya consenso sobre ellos y que sean respetados por todos.

El segundo desafío es la **representatividad**. Para que exista democracia representativa los electores se tienen que sentir representados por los elegidos. Contra este principio también actúa la historia acumulada. La distancia entre sociedad civil y sociedad política ha ido creciendo. La campaña de los partidos impide esta identificación. Muchas veces las campañas insisten más en desprestigiar al contrincante que en promocionar una candidatura. Generalmente promocionan un candidato que hace promesas y no un programa. El mismo proceso de la campaña y la práctica política llevan a una concepción clientelista de la militancia que los aleja de la identificación con la mayoría de los electores. Aunque las campañas tienen un fuerte contenido personalista, el voto para organismos como el congreso y el cabildo municipal no es personal. No se pueden escoger personas, sino partidos. En el caso del cabildo, la elección de regidores no está sectorizada de forma que se pueda seleccionar al regidor que tendrá bajo su responsabilidad una determinada zona del municipio. En el Senado hay una terrible desproporción. El Distrito Nacional, con la tercera parte de los electores, tiene igual representación que la Provincia Independencia, con menos del 1% de la población electora.

Esto significa que un partido puede alcanzar control del Senado con menos del 10% de los votos, si logra concentrarlos en las provincias de menos población.

La ausencia de mecanismos de diálogo, participación e incluso revocación una vez realizadas las elecciones permite la práctica común de desentenderse de los electores una vez pasadas las elecciones. Esto ha creado el complejo de pavo de Navidad en la población, que la engordan en la campaña, para olvidarla después. Es necesario romper esta tradición con una campaña centrada en programas claros, con una mayor relación entre partidos y sociedad civil y con nuevos criterios para la elección de candidatos, menos centrados en el clientelismo y más en la imagen pública del candidato. Es necesario abocarse también a la revisión de los procesos electorales redefiniendo la representatividad sectorial y separando, como ya han hecho muchos países, las elecciones municipales de las nacionales.

El tercer desafío es la **participación**. La institución estatal dominicana es altamente centralizada. Decimos que tenemos un régimen presidencialista. La Cámara de Diputados tiene un poder muy limitado. Ya hemos visto la debilidad del Senado. Los Ayuntamientos son totalmente dependientes del Poder Ejecutivo. La práctica política ha sido de tipo caudillista, utilizando al máximo todos los recursos de centralización del poder que le concede la estructura. El Secretaría de la Presidencia, por ejemplo, maneja la mitad del presupuesto nacional asumiendo funciones de ayuntamientos y Secretarías de Estado. En los últimos años se ha acentuado la exclusión de la sociedad civil de toda participación. Las instituciones del Estado han sido convertidas en recursos políticos. De ahí el poco interés en implementar la carrera administrativa. Esto produce un Estado burocrático, ineficiente y corrupto, que se maneja como oferta para el clientelismo político.

Crear la verdadera participación democrática supone la aplicación de una serie de reformas administrativas y estructurales que llegan hasta la reforma constitucional y que comienzan por la reforma de los partidos. No se trata únicamente de la modernización necesaria de las instituciones estatales sino la garantía de que ella incluya una real participación de la ciudadanía en los procesos de decisión y ejecución.

El cuarto desafío es la **educación para la participación democrática**. Tenemos una historia de caudillismo, clientelismo y corrupción administrativa que pesa sobre nuestras espaldas. Estas prácticas no se borran por decreto. Es toda una cultura política a desarraigar que justifica las acciones de fuerza como medio de alcanzar el orden. La actitud con relación a los militares golpistas de *Haití* o el intento de justificación del frustrado autogolpe de Serrano Elías en Guatemala muestran cuán profundamente arraigada está esta actitud de subordinación de la democracia a otros valores.

Aunque el país vive un rápido proceso de modernización, la asimilación de estos procesos por toda la población y en todas las instancias requiere tiempo y no se da sin una acción decidida de educación para la democracia. Esto supone un cambio en la visión del mundo, en los valores y en los hábitos de comportamiento. Para lograrlo no basta con predicar las nuevas ideas. Hace falta crear instituciones que conviertan en eficaces aquellas prácticas que están más en consonancia con los nuevos valores democráticos. Mientras el abuso de poder, el enllave, la centralización y la permanencia en el poder sean las prácticas exitosas toda predicación de valores democráticos estará abocada a fracasar.

Tenemos que institucionalizar la rotación del liderazgo, la participación en los procesos decisorios, la legislación adecuada con los mecanismos que garanticen su aplicación, la separación clara de funciones que impida la acumulación de poder, la revalorización de la solidaridad y de lo colectivo (el bien común, la propiedad colectiva, etc.). Esta educación es tarea de toda institución. Educar para la democracia requiere democratizar el interior de las instituciones para romper actitudes caudillistas, continuistas, excluyentes o centralizadoras.

Un quinto desafío es la **eliminación de la pobreza**. La creciente brecha entre pobres y ricos aumenta las posibilidades de abuso del poder, de exclusión, de falta de institucionalidad democrática, de *dependencias enquistadas como puñal no guardado*. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional amenaza con agudizar esta situación. Desconcierta ver cómo las mismas instituciones

que hablan de democratización proponen programas que incrementan la pobreza de las mayorías. Los programas asistencialistas tienden a fortalecer el clientelismo debilitando la construcción de una democracia verdadera.

El sexto desafío es a la **sociedad civil**. En los últimos años se ha comprobado que su fortalecimiento obliga al Estado a acelerar los cambios necesarios. Su debilidad permite al Estado descuidar estos procesos. Es necesario que la sociedad civil con todas sus instituciones se fortalezca y asuma su vocación ciudadana de participar y exigir. Pero es necesario que esto se haga desde una reforma de la misma sociedad civil. Ella misma tiene que democratizarse. Debe superar los mecanismos de exclusión que todavía tiene; reconocer como interlocutores y copartícipes a los nuevos sujetos sociales que piden espacio político; cuestionar la cultura del consumo y la espiral de violencia en la que se ha dejado atrapar; repensar los caminos de su modernización periférica creadora de nuevas exclusiones y dependencias; aceptar la condición pluralista de la sociedad moderna dejando espacios al disenso y a las minorías; descentralizar el poder a su interior y aceptar el diálogo hacia el exterior; institucionalizar la rotación del liderazgo y la consulta a la base como ejemplo.

Las instituciones de la sociedad civil no podrán mantener su demanda de democratización y honestidad al Estado mientras no hagan su propia reforma interior y en sus relaciones con otras instituciones. Es la tarea pendiente de la familia, la escuela, la iglesia, las organizaciones gremiales y de otros grupos sociales.

El presente número procura ser un aporte a esta discusión sobre la democracia y al papel que la educación tiene en su construcción. El artículo de José Luis Alemán llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta los sectores populares en el proceso de creación del orden democrático. Pablo Maríñez recorre nuestra historia reciente para descubrir las interrupciones de la democracia dominicana. Ambos artículos hacen hincapié en la importancia de la cultura política.

El comentario de Rafael Emilio Yunén al libro de André Corten "El Estado Débil" nos hace ver cómo las debilidades estructurales del Estado resquebrajan los procesos democráticos. La comparación con Haití nos recuerda la conexión histórica de los procesos en ambos lados de la isla.

Marco Raúl Mejía al ubicar la educación popular en el actual marco internacional nos permite descubrir su aporte posible en la construcción de la democracia y nos sugiere pistas de acción.

El número se completa con el trabajo de Carolina Mueses de Molina. Un recorrido por la bibliografía sobre Educación Popular en un área de vital importancia dentro de los servicios públicos: salud y nutrición. Este trabajo nos devuelve a la urgencia de democratizar estos servicios no sólo desde la perspectiva cuantitativa (que lleguen a más personas), sino desde la perspectiva cualitativa (que sean estructuralmente democráticos). Es una invitación para que en estos tiempos del clientelismo, la propaganda y el personalismo caudillista que se nos avecinan no nos quedemos como meros espectadores, sino que entremos a proponer desde nuestra propia reforma y desde nuestra exigencia ciudadana. Es la oportunidad de dar lecciones de democracia que nos permitan pasar esta materia pendiente.